

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -  
SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Apelación Auto  
Exp.05360-31-05-001-2018-00205-01

La Sala Cuarta de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados Carlos Alberto Lebrún Morales (sustanciador), María Eugenia Gómez Velásquez, y Nancy Gutiérrez Salazar, pasa a resolver los recursos de apelación interpuestos por GUILLERMO ENRIQUE PATIÑO ROLDAN, el sindicato UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA (UNTTC), y la confederación UNIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (UTC), frente al auto que aceptó el desistimiento de las pretensiones y dio por terminado el trámite, en este proceso especial de fuero sindical (permiso para despedir), promovido en contra del primero por TRANSPORTES T.E.V S.A.

**ANTECEDENTES:**

La demandante promovió esta acción especial para lograr el levantamiento del fuero sindical del demandado y la autorización judicial de su despido, como es el mandato de las normas que regulan la materia. Antes de la

diligencia de que trata el artículo 114 del CPTSS, y por supuesto de la sentencia que pusiera fin al proceso, la compañía desistió de las pretensiones en memorial del 18 de mayo de esta calenda, manifestando: *“por medio del presente me permito solicitar el DESISTIMIENTO DEL PROCESO en los términos del artículo 314 del Código General del Proceso y siguientes, en consideración a que el demandado ya fue desvinculado de la actividad laboral, desnaturalizándose así el sentido de este proceso especial del cual se venía haciendo uso. Acorde a lo anterior, solicitamos al despacho muy respetuosamente, no proceder con la condena en costas, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha celebrado ni siquiera la audiencia especial, y por ende no se ha desarrollado la etapa de práctica de pruebas, y no habrá condena desfavorable para ninguna de las partes.”*

Luego del traslado de esa solicitud, la *a quo* dictó la providencia cuestionada, el 9 de junio pasado, allí admitió el desistimiento sin condena en costas y dispuso el archivo del expediente. Consideró que la pretensión de la acción se circunscribía a la autorización del permiso para despedir, por lo tanto, no es, ni ha sido parte del litigio si lo ocurrido con el accionado es un despido ilegal, y hay lugar o no a su reinstalación, y en esa medida la accionante se encuentra facultada para desistir de sus aspiraciones

Los apelantes atrás identificados, en síntesis, insisten en que, al desistir la empleadora de las pretensiones, el proceso debe continuarse por la posibilidad de reintegro del demandado, quien fue despedido arbitrariamente en el curso de este litigio, el 27 de octubre de 2020, pese a haberse aceptado su titularidad de la garantía foral. Específicamente, el sindicato UNTTC, plantea varios argumentos que en su sentir demuestran la ilegalidad procesal y sustancial del auto gravado: i) la empresa presentó el memorial de desistimiento al juzgado sin remitirlo simultáneamente a la contraparte; ii) la solicitud de desistimiento no debió ser presentada por el apoderado sustituto de la demandante, sino por el principal; iii) de acuerdo al artículo 114 del Código General del Proceso la solicitud de desistimiento debe ser incondicional y solo perjudica a la persona que lo hace; desde su

perspectiva en este evento, el desistimiento afecta al trabajador demandado *a quien se le impide el derecho de acceso a la justicia para demostrar que fue despedido injustamente sin permiso de la autoridad judicial que es víctima de una persecución sindical, situación que solo benéfica a la demandante*. Y iv) el auto que aceptó el desistimiento no condenó en costas a la accionante, cuando ello opera por ministerio de la ley.

### CONSIDERACIONES:

El problema jurídico a resolver por la Sala, consiste en determinar si es procedente la confirmación o no de la providencia que dio por terminado el proceso especial de fuero sindical (permiso para despedir), lo que dependerá de si era posible o no, que la empleadora desistiera de sus pretensiones.

Para abordar ese tópico, es inevitable acudir a los artículos 314 y siguientes del Código General del Proceso, que son aplicables a este rito por la remisión analógica prevista en la regla 145 del CPTSS. Según estas disposiciones, el polo activo puede desistir de las pretensiones asumiendo las costas, antes de que se dicte sentencia que ponga fin al proceso -se trata de una facultad unilateral que no implica una exposición de motivos, a decir verdad, la norma no exige que se brinden argumentaciones a los juzgadores al momento de su manifestación-. Señalan igualmente, que esta solicitud puede ser promovida por apoderado facultado para ello, y que si existe demanda de reconvención, pese al desistimiento de la demanda principal, el proceso debe continuar. Igualmente, prevén que una vez aceptado el desistimiento el juez puede abstenerse de condenar en costas: i) si así lo convienen las partes; ii) si el desistimiento es respecto de un recurso, y se solicita ante el juez que concedió el medio de impugnación, iii) si se desiste de los efectos favorables de una sentencia ejecutoriada; y iv) si se coadyuva la solicitud de desistimiento condicionada a que no exista condena en costas.

Con esas precisiones, descendiendo al sub lite, se aprecia que los apelantes proponen que el proceso no puede terminarse, debido a que, ante el despido arbitrario del demandado ocurrido en marcha de este juicio, el trámite debe continuar para ventilarse la posibilidad de su reintegro. En otras palabras, se sugiere de alguna forma, la existencia de una reconvención, para incluir dentro de las pretensiones, la declaración judicial de la ilegalidad del despido, y la reinstalación del trabajador aforado.

Al respecto, es preciso indicar que la posibilidad de demanda de reconvención en este proceso especial, no fue prevista, ya que, la regulación expresa de las fases a agotar cuando por vía judicial los empleadores aspiran al levantamiento del fuero sindical de que es titular uno de sus colaboradores, y por tanto la autorización de desvinculación de aquél (artículos 112 y siguientes del CPTSS), nada exponen al respecto. Al contrario, esa alternativa sí fue pronosticada para los procesos ordinarios, nótese que la mención a dicha figura se encuentra en los artículos 75 y 76 de ese estatuto, que hacen parte del título “*procedimiento ordinario*” del mencionado código, lo que se justifica porque el propio legislador ha querido que, por las materias tratadas en el procedimiento especial, el mismo se surta en forma sencilla y breve.

Con todo, de considerarse que la dicha figura si tiene cabida en estos casos, las últimas normas aludidas, imponen varios requisitos para la admisión de la demanda de reconvención, a saber: 1) Que el Juez sea competente o se admita la prórroga de jurisdicción, 2) Que se formule en escrito separado de la contestación y 3) Que cumpla con los requisitos del artículo 25 del CPTSS. Los últimos dos, brillan por su ausencia en el *sub lite*, pues la contestación de la demanda no ha ocurrido: el momento procesal oportuno para ello era la audiencia de que trata el artículo 114 ibídem, la que no tuvo lugar porque la solicitud de desistimiento fue presentada con anterioridad.

Es de resaltar que, en un asunto de contornos fácticos similares al presente, el órgano de cierre de esta jurisdicción en sede de tutela, señaló que una vez presentado el desistimiento, la jurisdicción no puede continuar con el trámite especial interpuesto por el empresario; lo que corresponde al trabajador es iniciar la acción de reintegro. En efecto, en la sentencia STL1296 de 2015, se indicó:

*“...esta Sala no encuentra cómo lo dispuesto en aquellos proveídos resulta ser vulneratorio de los derechos del aquí accionante, pues, de hecho, al haberse radicado respecto de aquél, desistimiento por parte de Telebucaramanga S.A. E.S.P, el citado proceso no podía tramitarse en su contra, ni consecuentemente, emitirse fallos de instancia que decidieran el levantamiento del fuero sindical y autorización de despido.*

*En otros términos, mal podía el Juzgado y Tribunal accionados haber decidido respecto de la pretensión de levantamiento de fuero sindical, si la entidad promotora había desistido de la litis respecto del aquí accionante; un actuar contrario, hubiese significado una extralimitación de competencia por parte de las autoridades judiciales.*

*Pese a lo indicado y atendiendo que lo pretendido por el accionante es demostrar que se desconoció su garantía foral, que fue despedido injustamente y que, por ende, tiene derecho al reintegro y al pago de una indemnización por los perjuicios causados, debe señalarse que para tales efectos, era deber del actor, acudir y promover adecuadamente, el mecanismo ordinario, de primer orden e idóneo, que tenía para defender sus intereses y alegar la condición de aforado que aquí manifiesta, cuál era el proceso ordinario -fuero circunstancial- y solicitar allí mismo las indemnizaciones a las que consideraba tenía derecho...”.*

Aplicando tales reflexiones al *sub judice*, en vista que el desistimiento se presentó por la convocante sin mediar condición alguna, a través de apoderado facultado para ello (pág. 3 y 105), y no hay sentencia ejecutoriada, se ajusta a derecho la decisión cuestionada: la aceptación del desistimiento de las pretensiones y por tanto la finalización del proceso. Sin que dicha conclusión pueda variar, ante los argumentos específicos introducidos por uno de los sindicatos, relativos a la falta de envío del memorial a la contraparte, y lo perjudicial de aceptar el desistimiento para el trabajador; lo primero, porque de haberse presentado ese impase, tal se

solucionó con el traslado a los resistentes que hizo el juzgado de dicha petición; y lo segundo, porque si bien los artículos atrás descritos que regulan el desistimiento, aluden a que su aceptación afecta solo a quien desiste, ello debe comprenderse en el ámbito y a consecuencia de la pretensión, y en ese sentido, en el contexto de este proceso, no puede decirse que la determinación de desistir afecte al trabajador, quien no ha enarbolado ninguna aspiración en contra de la actora, de hecho ocupa la posición de polo pasivo en este expediente, otra cosa diferente es que por no haber interpuesto la acción que le correspondía luego de su desvinculación, deba asumir las consecuencias adversas de ese actuar, lo que no puede colegirse como una afectación derivada del desistimiento de este proceso.

En lo que sí tienen razón los apelantes, es en que una vez aceptado el desistimiento (aparte en el que se confirmará el auto recurrido), correspondía a la *a quo* condenar en costas de primer grado a TRANSPORTES T.E.V S.A.S, toda vez que ninguna de las circunstancias que la exoneraban (numerales 1 a 4 del inciso 4 del artículo 316 del CGP), se presentaron. En ese aspecto, se revocará lo decidido en primer nivel, para en su lugar condenar a la activa a pagar las costas de la primera instancia en favor del demandado, quien, pese a no haberse realizado la audiencia del artículo 114 del CPTSS, efectuó actuaciones judiciales, tales como presentación de memoriales con los que intentó contestar el escrito inicial. No se disponen en favor de las organizaciones colectivas, pues su intervención en este trámite no es calidad de demandadas propiamente, sino para coadyuvar al resistente principal, según lo previsto en el numeral 2 del artículo 118 B del CPTSS. En esta instancia no se causaron, por la manera en que se deciden los recursos. Las agencias en derecho deberá fijarlas el juzgado de conocimiento, como es el mandato del artículo 366 del CGP.


### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas, excepto en cuanto no condenó en costas, aspecto que se **REVOCA**. En su lugar, se **CONDENA** en costas de primera instancia a TRANSPORTES T.E.V S.A., y en favor de GUILLERMO ENRIQUE PATIÑO ROLDAN. **REMÍTASE** el expediente al juzgado de origen para lo que corresponde.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 129 fijados el 26 de julio de 2021 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.